

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTA

Bogotá, D.C., 27 de septiembre de 2021

Proceso Medida de Protección (127-2021)
Radicado 2021-00500

A continuación procede el despacho a desatar el recurso de apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, previo las siguientes,

ANTECEDENTES

La señora JENNIFER ALEJANDRA RUIZ CANTE presentó solicitud de medida de protección en su favor y el de su progenitora BERTHA GRACIELA CANTE RAMIREZ contra OMAR ANDRES CUERVO FERNANDEZ denunciando hechos de violencia intrafamiliar, aduciendo que el señor OMAR ANDRES CUERVO FERNANDEZ la maltrata psicológicamente, le dice que la va a sacar del apartamento porque es de él, cuando el apartamento se lo compraron al hermano de ella a quien aun le deben dinero, también le dice que le va a quitar el niño porque él tiene una prima que es abogada; manifiesta que cuando discute con OMAR ANDRES se encierran en el cuarto y él le ordenó a su mamá que cada vez que discutan, se tiene que encerrar en su cuarto y que no puede meterse, en esas discusiones se echan en cara las cosas como cuando él no tiende la cama, porque él no colabora con los quehaceres domésticos y por eso discuten. Afirma que el 11 de marzo ella se levantó para ir a trabajar y su mamá le dijo que le ayudaba a preparar el almuerzo y ella se fue a bañar, OMAR ANDRES no tenía que ir a trabajar ese día y se iba a montar bicicleta y comenzó a gritar a su mamá diciéndole que ella no tenía por qué cocinar que eso era su responsabilidad. Dice que la violencia que OMAR ANDRES ejerce en su contra es psicológica porque él siempre la hace sentir mal, la hace sentir que es la culpable de las cosas que pasan en la relación y siempre tiene que pedir perdón y él no reconoce sus errores, además él toma mucho, entre semana tomaba día de por medio y los fines de semana toma más, en ocasiones su hijo de año y medio encontraba las latas de cerveza en la sala.

Instruidas las diligencias, la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II de esta ciudad, mediante providencia emitida el día 26 de julio de 2021 impuso medida de protección en favor de la señora JENNIFER ALEJANDRA RUIZ CANTE y BERTHA GRACIELA CANTE RAMIREZ contra OMAR ANDRES CUERVO FERNANDEZ.

El accionado interpuso el recurso de apelación, que fuera sustentado por su apoderado judicial, señalando no encontrarse de acuerdo con lo dispuesto por la Comisaría aduciendo que: *“Interpone recurso de apelación, el (sic) vulneración al derecho de igualdad, debido proceso, acceso a la justicia, debido entre otras cosas a que no se presenta ningún tipo de prueba que consta la veracidad de los supuestos hechos de violencia del 11 de marzo de 2021, además de una entrevista psicológica por parte de una de las accionantes, también por las constantes negativas, por parte de la comisaria para allegar las pruebas pertinentes que desestimen las declaraciones por parte de las accionantes”*. Posteriormente presentó escrito en que efectúa un recuento de las

actuaciones adelantadas en primera instancia, reiterando que el aquo no tuvo en cuenta la documental por él aportada.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

CONSIDERACIONES

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 5º de la misma disposición contempla las medidas de protección y preceptúa: *“El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.”*.

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”¹¹*; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Las anteriores normas se encuentran encaminadas a *“garantizar los derechos de los miembros más débiles de la sociedad (menores, ancianos y mujeres), erradicar la violencia de la familia; es objetivo en el cual está comprometido el interés general, por ser la familia la institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, y por ser un espacio básico para la consolidación de la paz”*. Sentencia C-285 del 5 de junio de 1997, Corte Constitucional.

La H. Corte Constitucional en sentencia T 027/17 M.P. AQUILES ARRIETA GÓMEZ señaló: *“La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una “(...) situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”. En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar...”*

El art 2º de la ley 1257 de 2008 define la violencia contra la mujer: **“Artículo 2º. Definición de violencia contra la mujer.** Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 busca el respeto, la protección y dignificación de la persona humana, la familia adquiere una especial connotación como núcleo fundamental de la sociedad para la existencia tanto de aquella como de la organización política y social, configurándose, entonces, en sujeto de amparo y protección especial por parte del Estado, como institución básica de la sociedad. En sentencia proferida por la Corte Constitucional, se afirmó al respecto *“Así las cosas, la institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado para garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades intervenir en las relaciones familiares, no con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita*

del derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus integrantes. Así se deduce del contenido del artículo 42 de la Carta cuando señala: “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.....Precisamente, en desarrollo de la preceptiva constitucional antes citada, el legislador, mediante la ley 294 de 1996, ha creado un sistema normativo cuyo propósito radica en prevenir, corregir y sancionar la violencia intrafamiliar, a través de medidas pedagógicas, protectoras y sancionadoras que permiten a las personas solucionar sus desavenencias familiares por medios civilizados como el diálogo concertado, la conciliación y, en fin, otros medios judiciales, proscribiendo cualquier comportamiento agresivo o violento. Este procedimiento especial aumenta los mecanismos de acción del Estado, en lo que tiene que ver con la protección de las personas que han sido víctimas de actos violentos o amenazas por parte de alguno de sus familiares o de terceros. (Los otros mecanismos de protección aparecen consignados, entre otros, en el Código Penal y en el Código del Menor)...”.

Ahora bien, el artículo 18 *Ibídem* prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

La violencia intra-familiar en la Ley 294 de 1996 fue definida como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos incluyendo hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad familiar.

Como principales manifestaciones de la violencia psicológica, según diversos autores podemos clasificar diferentes conductas de violencia psicológica habituales en las situaciones de malos tratos:

Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, poner en tela de juicio la cordura de la víctima.

Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia, haciéndole pedir dinero, solicitando justificación de los gastos, dándole un presupuesto límite, haciendo la compra para que ella no controle el presupuesto, etc.

Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar amistades, restringir las relaciones con familiares, etc.

Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo. El agresor se irrita con facilidad por cosas nimias, manteniendo a la víctima en un estado de alerta constante.

Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, hacer daño a los animales domésticos, amenazar con irse o echar al otro de casa.

Desprecio y abuso emocional: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultarle, utilización de los hijos, prácticas de privilegios masculinos. Se la denigra intelectualmente, como madre, como mujer y como persona. Negación, minimización y culpabilización.

Es así como en contra de la Resolución que impone una medida de protección es procedente la apelación, con el fin de que el Juez determine si debe revocarse o no la decisión.

Descendiendo al caso bajo estudio, tenemos que la denunciante sostiene que el señor OMAR ANDRES CUERVO FERNANDEZ ha proferido en su contra maltrato psicológico al amenazarla con sacarla del apartamento aduciendo que es de él y con quitarle el niño ya que tiene una prima que es abogada; Así mismo, la señora BERTHA GRACIELA CANTE RAMIREZ afirma que el accionado también la amenaza con sacarla del apartamento y que el día de los hechos OMAR ANDRES tuvo una discusión con ALEJANDRA. Aunado a ello en la entrevista psicológica manifestó lo referente a los conflictos existentes entre la pareja, de lo cual tiene conocimiento toda vez que convivía con ellos, en la que aduce que JENNIFER y OMAR ANDRES tenían muchas discusiones, que él no permitía que ella le ayudara a su hija cuando lo requería porque se ponía bravo, con gritos y la trataba mal, por todo le formaba problemas, las amenazaba diciéndoles que él tenía una prima abogada.

Por su parte, el accionado niega la ocurrencia de los hechos endilgados en su contra aduciendo que la medida de protección solicitada por la señora JENNIFER ALEJANDRA RUIZ CANTE es una retaliación en su contra por la medida de protección solicitada en su favor ante la Comisaría de Familia de Engativá porque antes de recibir la notificación ella no sentía ningún peligro de parte suya, sino hasta el momento en que fue denunciada.

Analizadas la totalidad de las pruebas en forma individual y conjunta se establece claramente que el apelante cometió actos de violencia intrafamiliar contra de la señora JENNIFER ALEJANDRA RUIZ CANTE y su progenitora BERTHA GRACIELA CANTE RAMIREZ, tal y como esta lo manifestó en las exposiciones ofrecidas en la denuncia, dicha violencia no sólo se generó el día de los hechos denunciados sino que desde antes ya que el accionado venía presentando una actitud agresiva para con ella, no permitía que la señora Bertha le ayudara en los quehaceres, discutía con frecuencia con Jennifer y también las amenazaba.

Así las cosas, resulta claro para el despacho que el accionado ha ejercido actos de violencia psicológica en contra de las accionantes al amenazarlas con sacarlas del apartamento y a la señora JENNIFER ALEJANDRA con quitarle a su menor hijo, argumentación suficiente para determinar que la situación expuesta en la petición amerita la aplicación de medidas de protección, como acertadamente lo dispuso la Comisaría Primera de Familia Usaquén II de esta ciudad.

Ahora bien, el argumento de la apelación por parte del accionado consiste en que no le fueron tenidas en cuenta las pruebas que intentó anexar el 28 de junio de 2021 con las cuales pretendía demostrar que él no tiene un comportamiento agresivo en situaciones de discusiones, lo cual es reforzado incluso por mensajes enviados por la accionante vía whatsapp.

Conforme lo anterior, revisada la audiencia del 28 de junio de 2021 se evidencia que el accionado aportó como pruebas: i) Medida de protección definitiva No. 335-2021 a favor suyo en contra de las señoras JENNIFER ALEJANDRA RUIZ CANTE y BERTHA GRACIELA CANTE RAMIREZ, ii) Informe de medicina legal de fecha 26 de marzo de 2021 en que se le conceden 5 días de incapacidad, iii) Denuncia realizada ante la Fiscalía donde se ponen en conocimiento hechos de violencia por partes de las accionante, iv) Informe psicoterapéutico de fecha 13 de abril de 2021 que demuestra el comportamiento agresivo y vengativo de las accionantes; las cuales se rechazaron por la comisaría de conocimiento en razón a que las mismas resultan improcedentes como quiera que la materia de investigación como lo indicó el aquo es esclarecer si hubo o no violencia en contra de las accionantes y las pruebas aducidas por el ejecutado corresponden a otra medida de protección entre las mismas partes donde el señor OMAR ANDRES CUERVO FERNANDEZ es accionante y las señoras JENNIFER ALEJANDRA RUIZ CANTE y BERTHA GRACIELA CANTE RAMIREZ las accionadas, luego los hechos allí denunciados difieren de los investigados en el asunto que nos ocupa, decisión que no fue controvertida en su momento por el accionado.

Ahora bien, las pruebas que pretendía aportar con posterioridad a la citada audiencia, resultan extemporáneas y en tal virtud no pueden ser tenidas en cuenta por cuanto las pruebas deben ser aportadas en la oportunidad procesal establecida para tal fin, luego la decisión del aquo en relación con las pruebas se encuentra ajustada a derecho sin que se evidencie vulneración alguna al debido proceso, al derecho a la igualdad y menos al acceso a la justicia como lo indica el accionado.

Ahora, la argumentación desplegada en el asunto materia del presente pronunciamiento frente al maltrato psicológico del que fueron víctimas las accionantes, se compadece con la realidad probatoria que registra el expediente, con lo cual se tiene que existía suficiente material probatorio para tener por acreditado los hechos expuestos, como lo hizo la comisaria A quo, disponiendo unas medidas de protección en favor de los menores hijos de los intervinientes.

En cuanto al concepto de PERSPECTIVA DE GENERO, debemos remitirnos en primer lugar a Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

En efecto, en dicha ley se identificaron los principios que toda autoridad pública debe seguir al momento de evaluar un caso de violencia intrafamiliar, de los cuales se destacan, a) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y

sancionada por las autoridades públicas; c) **la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer**; entre otros.

Asimismo, dicha normativa estableció varias medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar, como son las mujeres.

La actora inició una acción de protección por violencia intrafamiliar en contra de su compañero por los actos de violencia psicológica, económica y de género cometidos en su contra.

La violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica de la mano con la perspectiva de género, así como la naturaleza y alcance del interés superior de las mujeres y los niños.

La Ley 1098/2006 expresa que *“se entiende por **perspectiva de género** el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.*

Así las cosas, la perspectiva de género consiste en la necesidad de reconocer, cuando ello sea relevante, la asimetría que puede existir entre un hombre y una mujer, debido a una relación de poder. Ello se traduce en la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que incluyan acciones afirmativas para superar la discriminación. Tal concepto encuentra apoyo en los artículos [13](#), [42](#), [43](#), entre otros, de la Carta Política y en los instrumentos internacionales.

En este estado de cosas, la administración de justicia tiene el deber de cumplir sus funciones a la luz de la perspectiva de género, en aquellos casos que se denuncie violencia sexual o intrafamiliar. A partir de lo anterior, existe entonces un deber constitucional bajo su cargo cuando se enfrenten con situaciones fácticas de estas características. Por esa razón, entonces, es obligatorio que incorporen criterios de género al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben analizar los hechos y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que se reconozca que un grupo tradicionalmente discriminado por virtud de las relaciones de poder, afectan su dignidad y autonomía.

En el caso objeto de estudio, se tiene que las querellantes corresponden a personas del género femenino, frente a los agravios de carácter psicológico y de género del que han sido víctimas por parte del accionado, que corresponden a violencia intrafamiliar contemplada en las leyes tantas veces mencionadas.

A instancias gubernamentales y jurídicas, en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer, como la equidad en el empleo, trabajo, salario, sin dejar a un lado, lo dispuesto en los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.

De igual manera, no puede pasar por alto el Despacho, que las circunstancias que rodean el presente asunto, por razones relacionadas con la perspectiva de género o cualquier otra circunstancia, no pueden ser desconocidas por el querellado, con el agravante de que las mujeres deben recibir un buen trato, pues precisamente el artículo 4 de la Ley 294 de 1996 (modificado por el artículo [16](#) de la Ley 1257 de 2008), ha señalado que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, pueda pedir al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.

Por lo anterior, se concluye que la Comisaría dio un correcto análisis a las pruebas oportunamente recaudadas atendiendo la situación de violencia psicológica generada por el accionado contra las accionantes; por lo que habrá lugar a confirmar la decisión impugnada, sin más consideraciones, por no ser ellas necesarias, ante la claridad meridiana que brota de lo antes expuesto.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 26 de julio de 2021 proferida por la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II de esta ciudad.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: DEVUÉLVASE las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name of the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA, BOGOTÁ D.C.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

SECRETARÍA

Bogotá D.C., ---28 de septiembre de 2021

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación
en el ESTADO N° 139

MARIA ELSY RIVERA USECHE

Secretario